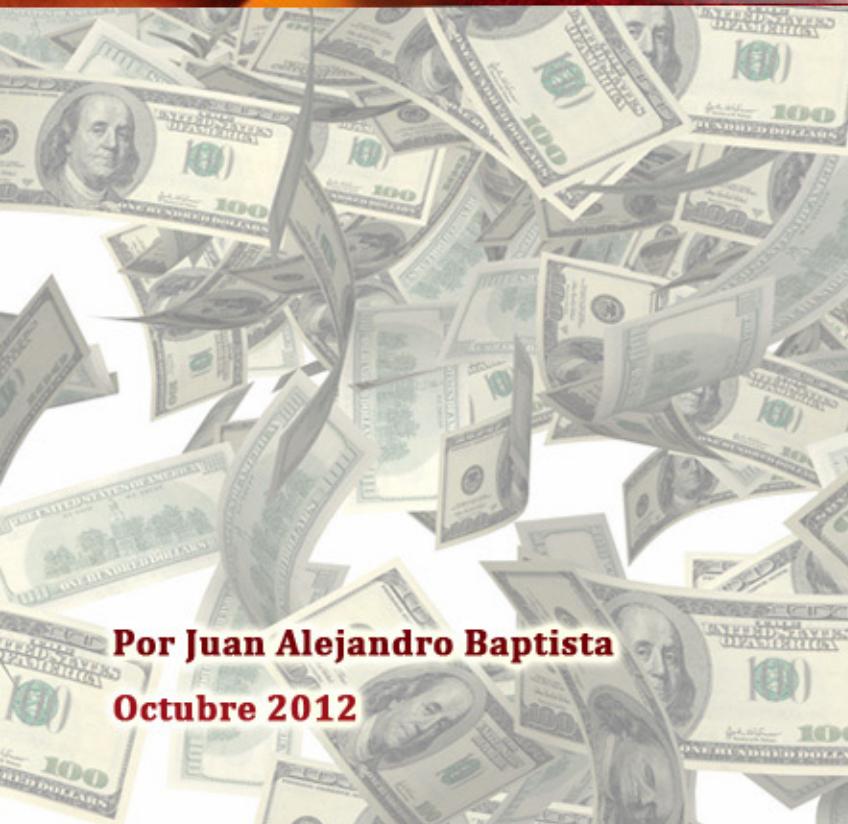


DEBIDA DILIGENCIA Y MONITOREO ALD después de las elecciones presidenciales venezolanas



**Por Juan Alejandro Baptista
Octubre 2012**

¿Se debe hacer algún monitoreo especial después de las elecciones? ¿Deber ser tratados como PEPs los miembros de los comandos de campaña? ¿Es recomendable vigilar el flujo de dinero de los bancos controlados por el gobierno? ¿Pueden presentarse violaciones a las sanciones estadounidenses? Estas son preguntas que todo profesional antilavado debe saber responder luego de un proceso electoral como el realizado en Venezuela el 07 de octubre de 2012.

Lavadodinero.com

DEBIDA DILIGENCIA Y MONITOREO ALD
después de las elecciones presidenciales venezolanas



Por Juan Alejandro Baptista
Octubre 2012

¿Se debe hacer algún monitoreo especial después de las elecciones? ¿Deber ser tratados como PEPs los miembros de los comandos de campaña? ¿Es recomendable vigilar el flujo de dinero de los bancos controlados por el gobierno? ¿Pueden presentarse violaciones a las sanciones estadounidenses? Estas son preguntas que todo profesional antilavado debe saber responder luego de un proceso electoral como el realizado en Venezuela el 07 de octubre de 2012.

Lavadodinero.com

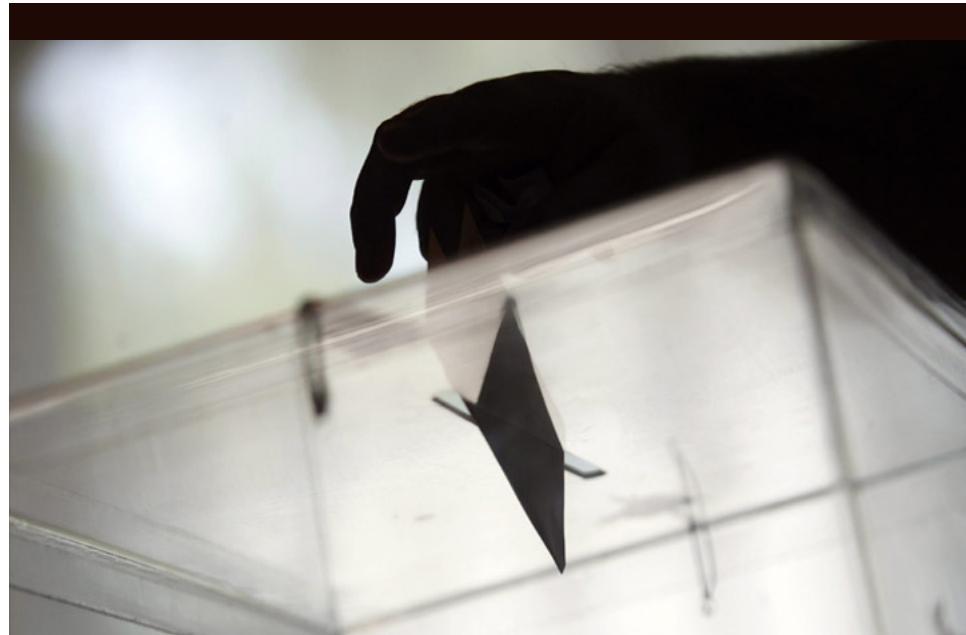
Título:

**Debida diligencia y monitoreo ALD
después de las elecciones presidenciales
venezolanas**

Autor: Juan Alejandro Baptista

Ilustraciones y Portada: Departamento Editorial
de Lavadodinero.com

Diagramación y Montaje: Departamento Editorial
de Lavadodinero.com



¿Se debe hacer algún monitoreo especial después de las elecciones? ¿Deber ser tratados como PEPs los miembros de los comandos de campaña de los candidatos perdedores? ¿Representan algún riesgo los donantes de las campañas? ¿Es recomendable vigilar el flujo de dinero asociado a los bancos controlados por el gobierno? ¿Pueden ser algunas donaciones violatorias de las sanciones y designaciones estadounidenses?

Estas son algunas de las preguntas que surgen luego de un proceso electoral como el realizado en Venezuela el 07 de octubre de 2012 y que todo profesional de cumplimiento debe saber responder.



E

n medio de un complicado clima político y con una polarización marcada en el pueblo venezolano, este domingo 07 de octubre se realizaron las elecciones presidenciales en Venezuela. La campaña electoral presentó un enorme desafío de cumplimiento antilavado. Sin embargo, durante el proceso post-electoral el monitoreo debe intensificarse.

Los procesos electorales en Latinoamérica están en creciente riesgo de ser financiados por dinero negro por culpa de los escasos controles que ejercen los gobiernos sobre los recursos financieros de los partidos políticos. Esto se desprende del informe “Dinero en la Política, Asunto de Todos”, realizado por la organización Transparencia Internacional (TI) en 2007 en 8 países de la región.

La situación de Venezuela no parece ser diferente, al contrario es muy marcada por ser una de las naciones con un mayor Índice de Percepción de la Corrupción (Amnistía Internacional) y por ser el país que según algunas estimaciones “cuenta con el más alto gasto en propaganda política per cápita”, de acuerdo a la Red de Conocimientos Electorales. - <http://aceproject.org/ace-es/topics/me/mec/mec04/mec04b/mec04b03> Esto se debe en parte a que en Venezuela no existe límite en el monto total que pueden manejar los partidos y candidatos, ni hay un tope en las cantidades de dinero que pueden donar las empresas, grupos o individuos.

Sin embargo, a juicio de Alberto Ávila, experto en prevención del lavado en procesos electorales, la ausencia de estos límites en donaciones o gastos electorales no genera “diferencia porque ese tope de campaña no es una limitante para el ingreso de dinero ilícito, o del dinero lícito con propósito ilícitos”.

Los riesgos previos

A pocas horas de iniciarse el proceso comicial, el presidente reelecto, Hugo Chávez, acusó a su contrincante Henrique Capriles Radonsky de financiar su campaña con dinero procedente del narcotráfico y de mafias extranjeras.

“Los grandes empresarios están aportando mucho dinero a su campaña a nivel nacional y desde el exterior lo hacen banqueros prófugos y mafias del lavado de dinero del narcotráfico”, aseveró el ahora reelecto jefe de estado en un acto popular, aunque no mostró pruebas ni anunció futuras investigaciones.

“Cuando se tiene a tantos partidos apoyando a un solo candidato, como fue el caso de Capriles, el monitoreo es más complicado, porque no es una sola cuenta bancaria la que moviliza el dinero, es una red de contribuyentes, donantes y de personas autorizadas las que forman parte del proceso”, aseveró un experto en cumplimiento venezolano,



quién pidió mantener su nombre en reserva.

Pero los riesgos asociados a la parte oficialista no son menores. Las instituciones que manejan cuentas de entes públicos nacionales, regionales o locales, deben prestar mucha atención a las transferencias “injustificadas” que pueden realizarse para financiar actos proselitistas. Pero las cuentas de los empresarios, especialmente de aquellos que manejan contratos y prestan servicios al gobierno, también deben ser monitoreadas con especial atención durante la campaña electoral.

Un factor de riesgo pocas veces considerado es la estatización de la banca venezolana. “Los bancos locales han tenido un gran desafío durante todo el proceso, ya que uno de los candidatos era el jefe de estado, que es quien controla el gobierno... y justamente ese gobierno es dueño de casi la mitad del sector financiero. Eso quiere decir que puede existir un flujo interbancario de dinero asociado a al financiamiento de gastos de campaña y movilizaciones, que muchas veces al ser originado por otra entidad financiera no es monitoreado adecuada-



mente”, explicó el experto venezolano.

Otro factor de riesgo atípico que debe considerarse en el caso de Venezuela es el de las delicadas relaciones que mantiene el gobierno con grupos designados como terroristas (por ejemplo, las FARC de Colombia y ETA de España) y con naciones y entidades designadas como Irán.

“Muchas veces a otros gobiernos les puede interesar que una fuerza política se mantenga en

el gobierno o que llegue al gobierno, por lo cual buscan la forma de hacer aportes de dinero para la campaña, lo cual suele estar prohibido en las regulaciones electorales y representa un riesgo para las empresas financieras involucradas en esa movilización del dinero”, precisó el experto.

Un caso muy sonado fue el del venezolano Guido Antonini, quien en el 04 de agosto de 2007 fue detenido entrando a Argentina con un maletín con

US\$800.000 en efectivo. Según la acusación de la fiscalía estadounidense en un caso relacionado, los procesados se reunieron con Antonini para “lograr su ayuda en ocultar la fuente de la contribución del dinero a la campaña política de un candidato en la reciente elección presidencial de Argentina”, confirmado así la versión de que el dinero era enviado desde la empresa estatal Petróleos de Venezuela para apoyar la campaña electoral de la actual mandataria Cristina Fernández.

Pero la atención y el monitoreo no deben estar solo sobre los grandes candidatos. En el caso de Venezuela, otros 4 aspirantes independientes se lanzaron con muy pocas oportunidades de triunfo, y de forma conjunta acumularon menos del 1% de los votos.

Muchas veces este tipo de candidato es descuidado en los procesos de monitoreo de las instituciones financieras y por las mismas autoridades. “Nos preocupa que hay dos grupos de fondos que quedan excluidos de la rendición de cuentas. Son los fondos políticos de candidatos individuales, los que no pertenecen a ningún partido, y el grupo de los fondos privados que recaudan los partidos”, advirtió a mediados de 2007 la directora para Latinoamérica de TI, Silke Pfeiffer.

En la etapa post electoral es cuando mayor riesgo existe, ya que el monitoreo por parte de las instituciones de gobierno y de los particulares disminuye

Sin embargo, los riesgos de penetración de dinero ilícito en estos procesos están igualmente presentes luego de los comicios.

Luego de las elecciones del domingo, los bancos y entidades financieras venezolanas deben estar muy atentos. “Los bancos no solo pueden, sino que deberían realizar análisis después de las elecciones. En la etapa post electoral es cuando mayor riesgo existe, ya que el monitoreo por parte de las instituciones de gobierno y de los particulares disminuye. Es aquí cuando se realiza el pago de ciertas actividades para que no queden contabilizadas dentro del monitoreo electoral” que realizan las autoridades, advirtió Alberto Ávila.

El experto mexicano agregó que “es conocido que los políticos y las personas que financian sus campañas, ganen o pierdan, obtienen a cambio múltiples prebendas o favores”.

Según señaló Pfeiffer, “toda donación tiene un

Y después de las elecciones... ¿qué?

Muchas veces los esfuerzos de monitoreo y debida diligencia se quedan en la campaña electoral.

precio y los fondos se dan a cambio de favores que se reflejan en ciertos intereses a la hora de otorgar concesiones, en concursos públicos y en tratar con mano blanda a narcotraficantes, con lo cual si la transparencia financiera de los partidos no existe, no hay manera de controlar estas acciones corruptas”.

Un concepto amplio de PEP

Dentro de todo el esquema de monitoreo pre y post electoral que debe realizarse, surge una figura poco identificada y muchas veces ignorada por el personal de cumplimiento y hasta por las mismas autoridades: los miembros de los comandos de campaña de los candidatos perdedores.

A juicio de Alberto Ávila es necesario darle tratamiento de persona expuesta políticamente a quienes estuvieron involucrados en la campaña electoral de todos los candidatos, incluso de los perdedores. Pero además, recomienda el experto, se debe tratar como PEP a los asesores políticos.

Muchas veces hay personas que vienen creciendo dentro de los partidos de forma solapada, poco notoria, y llegan a tener ciertas posiciones de toma de decisión. También hay individuos que hasta ese momento no han tenido una participación activa en la política, pero llegan a formar parte de los comandos de campaña.

Monitoreando a los plutócratas

Los oficiales de cumplimiento venezolanos –y aquellos de otras jurisdicciones que tienen clientes venezolanos- deben centrar sus mayores esfuerzos de monitoreo sobre las cuentas y transacciones de los clientes más adinerados, así como de las empresas o entidades con mayor capital, esto debido a que son ellos quienes pueden realizar mayores aportes a las campañas y, por ende, recibir luego compensaciones por ese apoyo luego de las elecciones.

“Si no hay límites de donaciones, un rico puede dar una enorme cantidad de dinero mientras que quienes no poseen riquezas tienen muy poca posibilidad de influir en el financiamiento de su partido. Se genera plutocracia, porque solo los adinerados pueden financiar las campañas”, explicó Ángel Álvarez, investigador del tema y autor del libro Los dineros de la Política (1997), en una nota publicada por el diario El Mundo (Venezuela) el pasado mes de julio.

La Oficina Nacional de Financiamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela era la encargada de controlar la contabilidad de los partidos políticos, quienes tuvieron que registrar sus libros contables en donde llevarían la relación de gastos e ingresos en la campaña. Venezuela cuenta con un Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en la cual se establecen las normas que rigen los comicios.